

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece doña Liliana Galdamez Zelada, directora jurídica y mandataria judicial de la Universidad de Chile y en representación convencional de la misma interpone reclamo de ilegalidad de conformidad con los artículos 7, 8, 28, 29 y 30 de la Ley N° 20.285 en contra del Consejo para la Transparencia representado por su director general don David Alejandro Jesús Ibaceta Medina, por haber incurrido en infracción de ley en la dictación de la Decisión de Amparo dictada en el caso rol C 4635-23, pronunciado en sesión ordinaria N°1392, celebrada el 19 de octubre de 2023 y comunicada por correo electrónico de 26 de octubre de 2023, que resolvió lo siguiente: “*EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:*

- I. Acoger el amparo deducido por don Cristián Riveros Muñoz, en contra de la Universidad de Chile por las razones antes señaladas.*
- II. Requerir a la Sra. Rectora de la Universidad de Chile que:*
 - a) Entregue al reclamante la información consultada anotada en el numeral primero de lo expositivo.*
 - b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.*
 - c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTHQXURUULP

la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.”

La reclamante, luego referirse a la admisibilidad del recurso y de explicar la naturaleza, causales y concurrencia de los requisitos de la acción deducida, se refiere a la tramitación de la solicitud de información, los argumentos vertidos en sustento de la misma, la negativa de su parte y al amparo interpuesto.

En tal sentido, señala que el 06/03/2023 don Cristián Riveros Muñoz presentó una Solicitud Electrónica de Acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia, la que el 07/03/2023 fue derivada a la Universidad de Chile, solicitando información relativa a los dominios inscritos en NIC Chile y la lista de todos los dominios registrados en nic.cl, que contenga: *Nombre de dominio; fecha de creación del dominio; y fecha de expiración del dominio*. El 19/04/2023 la Unidad de Transparencia de la Universidad de Chile respondió la solicitud mediante oficio UT (O) N° 175/2023, denegando la entrega del listado de nombres de dominio registrados en NIC Chile, en virtud de las causales establecidas en el artículo 21 N° 1, 2 y 5 de la Ley N° 20.285 y de las oposiciones de tercero a la entrega de información.

El 5 de mayo de 2023, ante la respuesta otorgada, el requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia y en contra de la Universidad de Chile. Admitido a tramitación el amparo, se confirió traslado a la Sra. Rectora de la Universidad de Chile, notificándole el reclamo y permitiéndole formular descargos y observaciones, el que fue evacuado el 18 de agosto de 2023. Posteriormente, por Decisión de Amparo Rol C4635-23, adoptada en sesión ordinaria N° 1392 de 19 de octubre de 2023, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por el requirente y ordenó a la Universidad la entrega de la información consultada, en los términos señalados precedentemente.

La reclamante, Universidad de Chile, en sustento de su reclamo, detalla el Estatuto Orgánico que la rige, el DFL N° 3 de 2006 del Ministerio de Educación y la autonomía que se le reconoce en la Ley N° 21094 y hace presente que NIC Chile (*“Network Information Center”*), es el Centro de Información de Redes del Departamento de Ciencias de la Computación, perteneciente a la Facultad de



Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a cargo de la administración y registro de los nombres de dominio “.CL”, creado el 27 de junio de 2017, por medio del Decreto Universitario Exento N°0022140, de dicha fecha, que aprobó igualmente su Reglamento de Organización y Funcionamiento, conforme con el cual NIC Chile es el continuador del Proyecto NIC Chile del Departamento de Ciencias de la Computación. Explica que el sistema de nombres de dominio o DNS (*“Domain Name System”*), tiene por función facilitar la navegación por Internet, lo que se logra mediante dos componentes: el nombre de dominio y la dirección IP (número de Protocolo Internet). Agrega que el DNS opera de manera jerárquica, en el primer nivel está en los dominios de nivel superior que pueden ser (a) dominios de primer nivel genéricos, como por ejemplo “.COM” o bien, (b) asociados a países o territorios, como “.CL”. Cada uno de ellos a cargo de alguna entidad administradora, la que está encargada de llevar el registro de los dominios inscritos. El dominio de primer nivel que identifica a Chile en Internet corresponde al sufijo CL y está administrado por NIC Chile y se encuentra regulado por medio de la Resolución N°001127 del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de fecha 28 de mayo de 2014, modificada y refundida a través de la Resolución N°00357, de 1 de junio de 2020 y establece las políticas y procedimientos relativos a la inscripción y gestión de un nombre de dominio.CL. En síntesis, NIC CHILE provee el servicio de inscripción y renovación de dominios, opera la red de servidores de nombres que permiten que ellos operen de manera confiable y eficiente, a la par que administra un sistema de arbitraje para la resolución de disputas por nombres de dominio. El servicio “WHOIS” (quién es), consiste en un protocolo que actúa como un servicio de consulta/respuesta que entrega información de los nombres de dominio inscritos, su estado y vigencia y permite acceder a un conjunto de datos de un nombre de dominio disponible para la consulta de terceros, adoptándose medidas de ciberseguridad. Añade que, en general, la colección completa de datos de las cuentas de usuario y de la inscripción de cada dominio no está disponible en la consulta del servicio de WHOIS.

Añade que la Reglamentación de “.CL” establece en su número 6, letra c), que todo titular de una inscripción y todo aquel que inicia un procedimiento de revocación de un nombre de dominio *“Autoriza hacer pública la información del nombre de dominio exclusivamente para fines relacionados con la administración*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTHQXURUULP

del registro de nombres .CL y la operación del DNS. Asimismo, acepta que los datos del registro sean informados a requerimiento formal de cualquier autoridad judicial o administrativa facultada legalmente para requerirla”, precisando que la autorización no incluye los requerimientos que efectúen terceros que no sean autoridades judiciales o administrativas legalmente facultadas para pedirlos. Asimismo, señala que el número 11, inciso tercero, de la misma Reglamentación determina que: “Cuando un nombre de dominio hubiera sido inscrito, será publicado por NIC Chile en una lista de “dominios inscritos” y se mantendrá en dicha lista por un plazo de publicidad de 30 (treinta) días corridos a contar dicha publicación, para los efectos de lo señalado en el número 18 de [la] Reglamentación” (referido al mecanismo de solución de controversias).

En consecuencia, sostiene que los propósitos de la publicidad de los datos de los dominios .CL se resumen en dos finalidades centrales: (a) para la ejecución de todas aquellas actividades relacionados con la administración del registro de nombres .CL y con la operación del DNS; (b) para todos los efectos derivados de la tramitación de las controversias derivadas de la inscripción de un dominio, en el procedimiento denominado de revocación de un nombre de dominio.

Especifica que del vínculo jurídico que existe entre NIC Chile y el titular de un dominio, emanan un conjunto de deberes enfocados a garantizar, entre otros, un estándar de gestión para toda la colección de datos de las cuentas de usuario y de los nombres inscritos, de manera que la publicidad está autorizada respecto de ciertos datos y sobre la base de finalidades acotadas (las derivadas de la prestación del servicio de DNS y de la resolución de controversias).

En definitiva, afirma que la publicidad de determinados datos de los dominios inscritos en .CL se puede expresar en base a las siguientes reglas: (a) abarca sólo una porción de los datos aportados al tiempo de la inscripción, disponibles previa búsqueda a través del servicio WHOIS, es decir, quien consulta debe indicar denominación exacta o parte del contenido del nombre de dominio requerido; (b) queda entregado a la decisión del titular del dominio aportar otros datos a quien se los pida, para cuyo caso NIC Chile provee un mecanismo de contacto; (c) la autorización para la publicidad de los datos está acotada a fines precisos, a saber, gestión del DNS y resolución de controversias; (d) la autorización para hacer públicos ciertos datos no abarca aquellos contenidos en la cuenta de usuario del titular del dominio, como por ejemplo, la información de los contactos del dominio.



En resumen, asevera que la información que NIC Chile publica en su servicio de búsqueda está constituida por los listados de nombres de dominio inscritos en la última hora, día, semana y mes, contemplando un servicio de “búsqueda exacta” o búsqueda que “contenga” ciertos caracteres, para saber si una expresión determinada está inscrita. Explica que la matriz de datos que se despliega en la consulta de dominios inscritos la componen datos cuya publicidad está autorizada por el titular de cada uno de los registros. Los datos que se publican en la base de datos de .CL son el resultado del tratamiento que cada titular de un dominio inscrito ha consentido expresamente.

De todo lo señalado resalta que: (a) NIC Chile, por las razones y en base a las finalidades expuestas, publica un subconjunto acotado de los datos de los dominios inscritos, de forma transitoria; (b) NIC Chile publica determinados listados y facilita la búsqueda de la información a través de un motor de búsqueda donde se obtiene una porción específica de información disponible para los dominios inscritos. En conclusión, sostiene que no se puede colegir que la publicidad de una parte pequeña de los datos entregados, con un fin específico autorizado por sus titulares, importe necesariamente la publicidad del listado completo, íntegro y total de nombres de dominio inscritos en .CL, sin expresión de causa ni compromiso de buen uso.

A continuación, expone las *causales de ilegalidad y las infracciones cometidas por el Consejo para la Transparencia* al adoptar la decisión reclamada, afirmando que infringe diversas disposiciones legales y constitucionales, que sirven de sustento a la presente reclamación de ilegalidad y cita los artículos 3°, 4°, 5°, 10°, 11° letras a), b), c) y d), 20°, 21° numerales 1, 2 y 5, 25°, 28° y 33° letras b), j) y m), de la Ley N°20.285; en los artículos 2° letras f), l), ñ) y o), 4°, 7°, 9° y 12° de la Ley N° 19.628; y, en los artículos 8° y 19 N°4 de la Constitución Política de la República, agregando que no aborda los argumentos esgrimidos por la Universidad, aludiendo a decisiones anteriores que al respecto cita, las que en concepto del reclamante no versan sobre la misma materia ni se refieren a las mismas causales de reserva, resultando sus fundamentos ininteligibles, infringiendo lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.980 y 13 de la Ley N° 18575.

Al efecto, la reclamante sintetiza en cuatro puntos las infracciones de ley que atribuye al Consejo para la Transparencia, a saber:



En **primer lugar**, señala que la **decisión reclamada ordena la entrega de información que no es pública y por tanto no está obligada a proporcionarla**, desde que acorde al artículo 8° de la Constitución Política de la República, sólo son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. En tal sentido, cita además los artículos 1, 3, 4, 5 y 10 de la Ley N° 20.285, afirmando que de su interpretación se concluye que el derecho de acceso y la obligación de entregar información pública por parte de los órganos de la Administración del Estado, se refiere a los actos y resoluciones, fundamentos y procedimientos, a lo que se suman los artículos 3 y 18 de La Ley N° 19.980 que definen el acto y procedimiento administrativo. Agrega que resulta innegable que la Universidad de Chile y, por ende, NIC Chile, forman parte de la administración del Estado, el listado que solicita el requirente no contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, ni tampoco sirven de sustento o complemento directo o esencial para un acto administrativo, ni forman parte de un expediente administrativo.

Añade que el artículo 5 de la citada ley, que en su inciso segundo señala que *“es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”*, disposición también es infringida por la decisión reclamada, por cuanto, ordena la entrega de información que no es elaborada con presupuesto público ni obra “en poder” del órgano requerido, por cuanto los terceros titulares pagan un arancel para inscribir un dominio y el servicio que provee NIC Chile es el de agente registrador .CL, mas no se ha destinado financiamiento público para elaborar dicha información ni la Universidad de Chile tiene titularidad alguna sobre ella, de lo que concluye que el servicio de registro y administración de los nombres de dominio .CL prestado por el Centro NIC Chile no se encuentra financiado con presupuesto público, ni se trata de información que pertenezca o cuya titularidad sea de la Universidad de Chile, sino que su financiamiento es originado exclusiva y esencialmente por la tarifa pagada por terceros a cambio de los diversos servicios recibidos, quienes son titulares de los dominios registrados. La decisión recurrida se desentiende que la información solicitada no existe en los términos que define el requirente o el



Consejo y debe sistematizarse y producirse para efectos de su eventual entrega, por mucho que los datos del listado hubieran sido entregados por sus titulares (los terceros, en términos de la Ley) como condición para la prestación del servicio y en los términos que la reglamentación de NIC Chile dispone. La información se encuentra parcialmente publicada, a través de canales precisos y limitados, porque existe un acuerdo entre el Registro y el tercero titular del dominio para poner a disposición del público información condicionada a finalidades precisas: la gestión del dominio de que se trata y el mecanismo de resolución de controversias.

La decisión reclamada infringe la Ley N°20.285 porque no basta que la información solicitada o aquella necesaria para producir el objeto solicitado, como es el caso particular, esté publicada para obligar a su entrega, ni aún porque “se encuentra permanentemente a disposición del público”, según ha entendido equivocadamente el Consejo. Esos no son los términos reglados por la Ley N°20.285 y la Constitución Política, por cuanto el acceso a la información que obra en poder de las entidades a las que se les aplica, está limitada por la configuración de una causal de reserva legal, de cualquiera de las establecidas en el artículo 21 de la referida Ley, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución Política. La Decisión reclamada incurre en un contrasentido lógico al suponer que se debe entregar el listado de nombres de dominio .CL porque una parte limitada de los datos que lo informan son accesibles mediante el servicio de WHOIS, ya que si la información estuviera permanentemente a disposición del público, no habría motivo para que el solicitante tuviera que pedirla expresamente.

La información masiva de los nombres de dominios no es información que esté permanentemente a disposición del público, sino que está acogida a una publicidad muy limitada para el sólo objeto de satisfacer fines específicos autorizados por sus titulares, esto es, la correcta administración del DNS y la resolución de controversias. Si se encontrase permanentemente a disposición del público, bastaría aplicar lo señalado en el artículo 15 de la Ley N°20.285 y comunicar al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, entendiéndose con ello cumplida la obligación de informar.

La decisión señala que la entrega de la información solicitada debe efectuarse porque lo pedido en nada afectaría derechos de terceros, por cuanto versa sobre información que debe obrar en poder de la reclamada por ser el organismo requerido el que está a cargo del registro de dominios, desarrollando un argumento



sin lógica alguna y no se hace cargo de comprender adecuadamente los alcances de la ley, desnaturalizando tanto el derecho de acceso a la información como las obligaciones de transparencia pasiva de los órganos de Administración del Estado. Al respecto sostiene que el artículo 10 de la Ley N° 20.285 establece la transparencia pasiva y delimita el acceso a la información pública.

Expresa que concurren excepciones, ya que la decisión reclamada exige entregar datos que no se encuentran comprendidos en el artículo 10, pues no son actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos ni es información elaborada con presupuesto público; tampoco corresponde a información pública de conformidad al artículo 5 mencionado porque no son actos o resoluciones, ni sus fundamentos o documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial o procedimientos que se utilicen para su dictación, ni es información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Institución, ya que son datos pertenecen a sus titulares y, por último, tampoco son actos o resoluciones públicas, o sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, según dispone el artículo 8° inciso segundo de nuestra Carta Fundamental; la información solicitada contiene datos de carácter, personal, tratándose de información protegida por las disposiciones de la Ley N° 19.628, de quórum calificado y por la reserva del artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285 .

Así, afirma que los datos que el Consejo para la Transparencia pide entregar se encuentran al margen de toda definición de lo que constituye información pública y susceptible de ser solicitada, además de estar protegida por normas de ley de quórum calificado, por lo que bajo ningún concepto es dable concluir que los nombres de dominio y su información conexas (identificación de sus titulares y correos electrónicos de contacto) correspondan a información pública, pues a su respecto concurren excepciones.

Expresa que el Consejo para la Transparencia, al acoger el amparo y ordenar la entrega de esa información, incurre en ilegalidad, al extender la aplicación de las normas citadas a información que se encuentra claramente al margen del derecho de acceso regulado en los artículos 10 y siguientes de la Ley N°20.285, pues lo requerido no corresponde a actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos, acuerdos ni a ninguna especie de información elaborada con presupuesto público.

En **segundo lugar**, afirma que **la decisión reclamada ordena la entrega de datos personales y de información que afecta la**



seguridad y los derechos de terceros, infringiendo los artículos 21° N° 2 y 5 de la Ley N° 20.285 en relación con los artículos 2°, letras f), l), ñ), o), 4°, 7°, 9°, 12° de la Ley N° 19.628 y la garantía constitucional establecida en el numeral 4 del artículo 19° de la Constitución.

Al efecto señala que la información que se ordena entregar contiene datos personales, pero la resolución -siguiendo lo resuelto por el mismo Consejo con anterioridad-, entiende que lo pedido en nada afecta los derechos de terceros, por cuanto versa sobre información que debe obrar en poder de la reclamada por ser el organismo requerido, el que está a cargo del registro de dominios. Al respecto señala que pedir el listado de cada dominio .CL sin que se identifique a una persona natural carece de sentido, teniendo en cuenta el servicio de WHOIS y las posibilidades de obtención de datos a partir de la disponibilidad del listado completo de nombres de dominio, agregando que la sola obtención del listado de los nombres de dominio permite a su tenedor acceder a una cantidad aumentada de datos, los que corresponden a personas naturales y jurídicas, instituciones públicas o privadas, nacionales y extranjeras, información que puede afectar los derechos de sus titulares.

En cuanto a las razones por las cuales denegó la entrega de información sobre la base de la causal del artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285, estima que dicha causal comprende datos de carácter personal, conforme con el artículo 2, letra f) de la Ley N°19.628 e información cuya publicidad afectaría los derechos de terceros, todos los cuales se opusieron a la entrega de información. Los datos son personales si la identificación de la persona es posible en función de la información disponible. El listado de nombres de dominio .CL está conformado por el conjunto de expresiones alfanuméricas que están inscritas en NIC Chile por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que les permite desarrollar su identidad en Internet. La cantidad de datos en el listado de dominio mediante un mecanismo de programación tornan posible lograr la identidad de la persona, núcleo de la protección constitucional y legal, por lo que la entrega de la información vulnera un principio de consentimiento no otorgado por sus titulares y la autodeterminación informativa. En síntesis, al autorizar la entrega del listado de nombres de dominio .CL se vulnera la ley y la Constitución que reconoce como límite al derecho de acceso a la información, el derecho de la protección de datos personales de terceros.



Finalmente expresa que en virtud de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política y del artículo 1° del Título VII, sobre Disposiciones Transitorias, de la Ley N°20.285, las normas de la Ley 19.628 cumplen con la exigencia de ser una ley de quórum calificado, por lo que, los datos personales que ella define y protege, no son información pública, ya que constituyen una clara excepción a lo establecido en el artículo 8° de la Carta Fundamental y en los artículos 5° y 10° de la Ley N°20.285, además de encontrarse indirectamente protegidos en virtud de las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 2 y 5 de este último cuerpo legal. En ese sentido expresa que la información cuya entrega se dispuso, no puede implicar la entrega masiva e indiscriminada de información de los titulares de dominio a terceros ni afectar la seguridad de los titulares de dominio, exponiéndoles a spam, fishing, ejecutar maniobras de ciberataque o fraudes.

La reclamante hace presente también que la entrega de la información afecta derechos de carácter comercial y/o económicos de los titulares de dominio, ya que un nombre de dominio responde una denominación del titular que por lo general identifica su nombre propio o denominación comercial y en muchas ocasiones corresponde a marcas comerciales registradas y en otras a una creación intelectual de cada titular de un dominio .CL. En la mayoría de los casos a través de un dominio .CL se desarrollan actividades económicas y por tanto la divulgación de información como el dominio registrado y la asociación al titular del mismo junto con la vigencia del registro ligado a la actividad económica puede afectar los derechos comerciales o económicos de sus titulares. Se trata de información sensible que no sólo compromete a los titulares propiamente tales sino también a los terceros que contratan con ellos, afectando la confidencialidad de las relaciones comerciales.

En **tercer lugar**, señala que **la decisión reclamada omite emplazar a los terceros que se verán afectados con la entrega de la información digerida**, infringiendo los artículos 20, 25 y 28 inciso tercero de la Ley N° 20.285, privándolos de hacer sus descargos ante el Consejo y de recurrir de ilegalidad eventualmente.

Señala que ante la petición de acceso a la información del requirente, el Consejo ha calificado como impertinente o inoficioso dar cumplimiento al artículo 20 de la Ley 20.285 y cita jurisprudencia de la que extrae las siguientes



conclusiones: i) toda vez que el órgano requerido se encuentre en presencia de una petición de acceso que pueda afectar derechos de terceros, debe poner en práctica el mecanismo de notificación a los terceros previsto en el artículo 20; ii) que dado tales supuestos, la autoridad debe comunicar a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente para que puedan ejercer su derecho legal a oponerse a la entrega de la información; iii) ni en el artículo 20 o en alguna disposición de la Ley de Transparencia, se reconoce a favor del requirente facultad para delimitar los alcances o las consecuencia de su petición, sin perjuicio de lo ya explicado a propósito de la propia naturaleza del servicio de WHOIS y de la información contenida en los nombres de dominio; iv) En otros términos, el órgano requerido vulnera la ley si omite comunicar a los terceros la presentación de una solicitud de información que pueda afectar sus derechos. Ni el solicitante o el Consejo para la Transparencia pueden liberarlo de dicho deber legal.

En opinión de la reclamante la ley no faculta al Consejo para prescindir del procedimiento que obligatoriamente se señala en el artículo 20 de la ley de transparencia que obliga al órgano requerido a comunicar a los terceros a que pueda afectar la información de cuyo acceso se trata, desde que se refiere a una entrega masiva de bases de datos que no ha sido autorizada por los titulares de dominio, privándolos del derecho a oposición y a reclamación de la decisión.

El Consejo para la Transparencia, en el procedimiento de amparo, omitió notificar a los terceros involucrados en la petición de acceso a la información, para efectos de lo previsto en el artículo 25 inciso primero de la Ley N° 20.285 y privándolos del derecho de reclamación reconocido en el artículo 28 inciso tercero de la Ley.

En **cuarto lugar** señala que **la decisión reclamada afecta el funcionamiento de NIC Chile**, infringiendo lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20,285 al descartar de plano cualquier afectación de sus funciones, reproduciendo lo señalado a propósito de la infracción al N° 2 del artículo 21 y la calificación de los datos personales y el artículo 28 inciso tercero 3 de la misma ley. Teniendo en consideración que la información que solicitó el requirente y cuya entrega ordenó el CPLT mediante la Decisión reclamada, contiene datos personales y cuya publicación puede afectar derechos de terceros, NIC Chile dio cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la LeyN°20.285, aplicando un procedimiento



análogo, que no lo libera de su obligación de notificar a todos los titulares de dominio “.CL”, recibiendo 413.346 oposiciones a la entrega de información.

Agrega que atendido los cientos de miles de registros de dominio en NIC Chile y de titulares, resulta evidente que solicitudes masivas como éstas implican una afectación de las funciones del Órgano requerido que, en su posición de garante, debe resguardar la información sensible de sus usuarios, conforme éstos mismos han manifestado la oposición a la entrega de información.

A lo anterior debe sumarse que la información solicitada no está permanentemente a disposición de NIC Chile, sino que debe procesarse especialmente para cada solicitud, por lo que resulta evidente que las solicitudes masivas implican una afectación de las funciones del órgano requerido que en su posición de garante, debe resguardar la información sensible de sus usuarios.

Finalmente solicita se acoja el presente reclamo de ilegalidad y se deje sin efecto la decisión de amparo individualizada declarando que no procede dar acceso a la información solicitada por el requirente.

Hace presente, además que son terceros interesados todas aquellas personas naturales y jurídicas que expresaron su oposición a la entrega de la información, cuya información de correo electrónico, para los efectos de su solicitud de información y el amparo deducido ante el Consejo, ha sido informada latamente en respuesta al Consejo para la Transparencia.

Segundo: Que el Consejo para la Transparencia, refiere que por Decisión de Amparo Rol C4635-23, adoptada con fecha 19 de octubre de 2023, acogió el Amparo por Denegación de Acceso a la Información en contra de la Universidad de Chile, ordenando al órgano entregar a don Cristian Riveros, la información que solicitó sobre los dominios inscritos en NIC Chile, afirmando que la misma se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de derecho de acceso a la información pública.

Al efecto, en **primer lugar**, solicita que el reclamo se declare inadmisibile en cuanto se fundamenta en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, al desconocer el texto del inciso 2° del artículo 28 de la Ley de Transparencia, que expresamente **prohíbe** a los órganos de la Administración del Estado, reclamar de ilegalidad de la resolución del Consejo para la Transparencia que otorgó acceso a la información que el organismo público requerido denegó, cuando la denegación se



hubiere fundado en la causal del N°1 del artículo 21 señalado, por lo que carece de legitimación activa.

En subsidio, en **segundo lugar**, invoca la falta de legitimación activa para desestimar el reclamo, desde que la Corte carece de competencia para conocer y pronunciarse al respecto, tal como ha resuelto en las causas que cita.

En **tercer lugar**, señala que la Corte Suprema ya resolvió la publicidad del listado o directorio de todos los dominios comprados a través del portal NIC.CL, en tanto no se dé acceso a datos privados, al responder la solicitud de información, haciendo presente que argumentos similares fueron vertidos en autos CS rol N° 12793-2019, que acogió el recurso de queja deducido en autos rol N° 39-209 de esta Corte.

En **cuarto lugar**, sostiene que el amparo por denegación de acceso a la información fue acogido por cuanto el Consejo estimó que no se configuraba la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que la solicitud de información no tiene la potencialidad de afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Universidad de Chile y no implica incurrir en distracción indebida de sus funcionarios.

Al efecto indica que la publicidad de la requerida no afecta el debido cumplimiento de las funciones de la universidad ni implica distracción de sus funcionarios.

La causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia invocada por la Universidad de Chile requiere el examen de determinados criterios objetivos, que hagan suficientemente plausible su aplicación para el caso concreto, teniendo como marco referencial, la descripción normativa referida a la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, no pudiendo alegarse como gravamen el propio cumplimiento del principio de publicidad y de las obligaciones de transparencia que emanan de la Constitución Política, dado que el Art. 8° inciso 2° de la Constitución, forma parte de las Bases de la Institucionalidad, y de la propia Ley de Transparencia.

En consideración a lo anterior, el Consejo estima como elementos para la ponderación de esta causal, entre otros, los siguientes: a) el tipo de información, distinguiendo si esta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo



establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como de desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) número de documentos que han sido requeridos, lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida y horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos, etc.

Asimismo, señala que la jurisprudencia del Consejo ha establecido que la causal de reserva alegada por la reclamante sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos, de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo, debiendo ponderarse para ello el volumen de información, la relación entre funcionarios y tareas y el tiempo estimado, entre otras circunstancias, teniendo presente, como se sostuvo en el considerando 2) de la decisión, que lo requerido en la especie no se refiere a información que no existe, que no se ha almacenado, o que requiera ser creada o compilada, sino que, por el contrario, versa sobre información que debe obrar en poder de la reclamada por ser el organismo requerido el que está a cargo del registro de dominios, ya que se trata de información que se encuentra registrada e ingresada digitalmente en las bases de datos de la Universidad.

En tal sentido agrega que los argumentos relativos al número de solicitudes de información recibidas no implican la disposición de una gran cantidad de funcionarios, sin especificar de qué manera afectaría la prestación del servicio ni como generaría un desincentivo en la contratación de nuevos servicios o registro de nuevos dominios, máxime cuando tiene el monopolio del registro, cuantificado en 700.000 dominios inscritos por el propio organismo, información que se encuentra debidamente digitalizada.

En **quinto lugar**, señala que la información solicitada es pública en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia y artículo 8 de la Constitución Política de la República, por obrar en poder de la



Universidad de Chile y encontrarse registrada e ingresada digitalmente en sus bases de datos. La información requerida corresponde a un listado o directorio con todos los dominios comprados a través del portal nic.cl, con sus fechas de creación y expiración, el cual obra en poder de la Universidad de Chile, que ha sido elaborado con presupuesto público, y que conforme a la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, NIC Chile ha sido quien ha nutrido al protocolo “WHOIS” de la información que ahora alega que reviste carácter sensible y apta para vulnerar los derechos comerciales y económicos de terceros. Además se publica en el sitio web el listado de todos los dominios registrados durante los últimos 30 días y pone a disposición de cualquier interesado un motor de búsqueda que permite saber si un determinado dominio se encuentra o no inscrito y acceder al nombre de su titular, de modo que aquello que se ordena entregar sólo es información que se limita a un listado con los datos que ya son públicos por su propia naturaleza y son accesibles a través de los mecanismos dispuestos por el mismo NIC Chile, lo que corrobora que la información solicitada es pública, por disposición de la reglamentación y funcionamiento del sistema de registro, obligando a poner a disposición del público los nombres de dominio sin restricción de acceso para terceros, en una fuente de acceso público.

Por lo anterior, no es efectivo que su entrega pueda facilitar situaciones de abuso o el envío de información no deseada a los titulares de los dominios comprados en el portal, máxime cuando NIC Chile ya no entrega ni pone a disposición del público el domicilio, teléfonos, ni direcciones de email de los contactos del dominio y en su lugar, provee un servicio para hacerles llegar un mensaje a través de un formulario web.

En **sexto lugar**, señala que los actos propios de la Universidad de Chile contrarían las alegaciones que ha formulado en su reclamo de ilegalidad, en lo relativo a la afectación de los derechos comerciales o económicos y protección de datos de los titulares de los dominios comparados en el portal NIC.CL, por cuanto el propio órgano reclamante informa pública y permanente, en un link disponible en la página web www.nic.cl, las listas de los últimos nombres de dominio inscritos en .cl, en la última hora, último día, última semana, y en el último mes, permitiendo el mismo portal desplegar diversa información relativa a cada dominio, como su titular, fecha de creación, fecha de expiración, y servidores; por lo tanto, la



solicitud se refiere a información pública, a la cual se puede acceder permanentemente en la página web señalada.

No es la decisión de amparo reclamada la que está divulgando datos personales u otro tipo de información relativa a los titulares de los nombres de dominios inscritos, sino que la Reglamentación para el Funcionamiento del Dominio CL y la Política de Resolución de Controversias por Dominios. CL, Resolución N° 01127, de 28 de mayo de 2014, de la Universidad de Chile, es la que sitúa a NIC Chile en la obligación ante la comunidad de redes de mantener datos públicos disponibles, en cuanto al registro de nombres de dominio y, además, a mantener también una base de datos que permita manejar el sistema de solicitudes de registro en línea, evitando la generación de dominios ya registrados, y obliga, además, a operar el servicio Whois, el cual permite que, mediante datos que deben ser públicos, la comunidad de internet pueda contar con la información sobre quién es responsable de nombres del dominio y cuáles son esos nombres de dominio registrados cuya inscripción se mantiene vigente.

En **séptimo lugar**, manifiesta que la publicidad de la información solicitada no afecta derechos de terceros, por lo que no se configura la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia., desde que permitiría a potencial atacante obtener para spam, phishing o para ejecutar otro tipo de ataques o fraudes, que ponen en riesgo la seguridad de las redes de los clientes del sistema de nombres de dominio .CL., lo que se descartó porque no se está requiriendo información que pudiera afectar la seguridad, derechos comerciales o económicos, o la vida privada de terceros, en los términos que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia

En relación a la ilegalidad fundada en que infringiría los artículos 25 y 28 inciso 3° de la Ley de Transparencia al omitir emplazar a los terceros que se verían afectados con la entrega de información, privándolos de efectuar sus descargos ante el Consejo y de recurrir de ilegalidad, hace presente que lo requerido es el directorio de todos los dominios comprados a través del portal de nic.cl con sus fechas de creación y expiración, sin que dicho listado contenga información que afecte derechos de terceros protegidos por la ley N° 19.628 o la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que las alegaciones carecen de todo sustento. En efecto, al requerirse sólo un listado, resulta del todo inoficioso dar aplicación al procedimiento dispuesto en el artículo 25 y 28 inciso 3° de la Ley



de Transparencia. En cualquier caso, los terceros tampoco se han visto privados de defensa, por cuanto, en la especie, ha sido la Universidad reclamante la que invoca en sede judicial la causal de reserva relativa a la afectación de derechos de terceros, tal como consta en el tenor del reclamo de autos.

Se trata de información que el propio órgano publica, por cuanto ya ha sido autorizado previamente para hacer pública la información requerida, y ante la falta de antecedentes suficientes que acrediten cómo con la entrega de los referidos dominios, pueden afectar directa o indirectamente la esfera de la vida privada de los titulares de los mismos. El nombre de los dominios actualmente vigentes no es un dato personal en los términos establecidos en la Ley N°19.628, encontrándose la mayoría de estos datos, permanentemente a disposición del público.

Respecto a la eventual afectación a la seguridad y a los derechos comerciales y económicos de las personas, ello resulta contraproducente con la publicación que de lo solicitado hace el órgano en su portal web. Por lo anterior y considerando que no se acompañaron antecedentes suficientes que acreditan cómo la entrega del listado otorga ventajas comparativas a terceros en desmedro de sus titulares, se debe desestimar lo esgrimido por la reclamante en este punto.

De esta manera, si bien la información disponible en el sistema público de consulta de dominios registrados, arroja el nombre de dominio registrado, la persona natural o jurídica que es su titular, agregando datos relativos al agente registrador, fecha de creación, fecha de expiración y el servidor de nombre, ni siquiera a partir de dichos datos se podría hacer una transferencia masiva de información confidencial y sensible de los titulares a terceros desconocidos, en términos de afectar sus derechos comerciales y económicos, pues de lo contrario, tal sistema de consulta pública no existiría.

Por lo demás, y justamente con la finalidad de precaver delitos informáticos, NIC Chile decidió publicar solo datos acotados a los antes mencionados, dejando de publicar datos personales de contacto, tales como domicilio, teléfonos, direcciones de email, evitando de este modo, el que se tome contacto con el titular del dominio, especialmente a través de envío de email no solicitado ("spamming").

Cabe tener presente, además, que para dar por configurada una causal de secreto o reserva de aquellas que contiene el Art. 21 de la Ley de Transparencia, no resulta suficiente la sola invocación o referencia a las causales, en términos meramente formales, sino que es menester determinar si la publicidad de la



información de que se trata, afecta o no algunos de los bienes jurídicos previstos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, siendo, por tanto, es necesario que el órgano público o el tercero que invoca la causal de secreto o reserva, acredite la real y efectiva afectación del bien jurídico protegido, no bastando en este punto una mera referencia a la afectación de dichos derechos.

En **octavo lugar**, señala que la decisión recurrida no vulnera la Ley N° 19.628 ni el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, desde que no se requirió ningún dato privado, sino sólo los nombres de dominios con sus fechas de creación y expiración, razón por la cual los datos solicitados no son estrictamente datos personales de los titulares de los nombres de dominio, sino un listado con los dominios inscritos, es decir, se trata únicamente de acceder a un directorio con todos los dominios comprados a través del portal nic.cl, pero el requerimiento de información no consiste en los nombres de las personas naturales que registraron esos dominios, por ende, el listado pedido es información que no consiste en aquellos datos que se detallan en la letra f) del Art. 2°, 4° y 9° de la Ley N° 19.628, y que evidentemente ya se encuentran registrados e ingresados digitalmente en las bases de datos de la Universidad de Chile, por lo que resultaba totalmente inoficioso que se diera aplicación al procedimiento que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el cual solo debe aplicarse cuando “la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros”, lo que claramente no ocurre en la caso sub lite.

Por otra parte, tampoco se ve afectado el derecho constitucional consagrado en el Art. 19 N°4 de la Constitución, por cuanto, si bien este señala que toda persona tiene derecho a “El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”, lo cierto es que en el caso sub lite, aun cuando se estime que la decisión de amparo indirectamente permitiría acceder a datos personales, lo cierto es que de todos modos, no se infringe lo dispuesto en la citada norma constitucional, ni en la Ley N° 19.628. En efecto, de conformidad al Art. 4° de la Ley N° 19.628, cuando un titular presta su aquiescencia en hacer pública la información para los fines relacionados con la administración del registro de nombres .CL, está consciente que NIC publica en su página web los datos inherentes al registro, incorporando información acerca de los dominios, y además acepta y declara que el registro del dominio no infringe ni viola de ninguna manera



cualquier derecho de un tercero, por lo que no hay infracción o tratamiento ilegal de sus datos personales, ni puede existir expectativa de privacidad respecto de dicha información.

Así, el acceso a los nombres de dominio que figuren registrados en NIC Chile no constituye una fuente reservada de información, sino que por el contrario, puede sostenerse que es una fuente accesible al público, en los términos definidos en la letra i) del Art. 2 de la Ley N° 19.628 y por lo tanto, a su respecto no rigen las restricciones de acceso previstas en los artículos 4° inciso primero, 7° y 9° de la Ley N° 19.628, que solo son aplicables respecto de datos personales cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, cuyo no es el caso de los nombres de dominio publicados por NIC y accesibles sin restricciones en el sistema de búsqueda disponible en <https://www.nic.cl/whois/>, por lo que a su respecto rige lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 4° de la Ley N° 19.628, que señala que no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público.

En conclusión, la Decisión de Reclamo Rol C4635-23, se encuentra totalmente ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción, y ratificándose la obligación de la Universidad de Chile de entregar la información que el Consejo dispuso sea proporcionada, por lo que no corresponde dejarla sin efecto.

Tercero: Que para una mejor comprensión de lo debatido, conviene tener presente lo siguiente:

1.- Con fecha 06 de marzo de 2023, don Cristián Riveros Muñoz presentó solicitud electrónica de acceso a Información Pública ante el Consejo para la Transparencia, para obtener información relativa a los dominios inscritos en NIC Chile, incluyendo la fecha de creación de cada dominio y su fecha de expiración, en un formato digital.

2.- La solicitud fue derivada a la Universidad de Chile con fecha 7 de marzo de 2023.

3.- El 19 de abril de 2023, la Unidad de Transparencia de la Universidad de Chile respondió la solicitud mediante Oficio UT (O) N° 175/2023, denegando la entrega del listado de nombres de dominio registrados en NIC Chile, en virtud de las causales establecidas en el artículo 21 N°1, N°2 y N°5 de la Ley N°20.285 y de las oposiciones de terceros a la entrega de información.



4.- El 5 de mayo de 2023, el requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo, en contra de la Universidad de Chile, conforme al artículo 24 de la Ley N° 20.285.

5.- Admitido a tramitación el amparo, se confirió traslado a la Universidad de Chile, permitiéndole formular descargos y observaciones, el cual fue evacuado el 18 de agosto de 2023, afirmando que no se trata de información pública e invocando las causales de reserva del artículo 21 N° 1, N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.295. En síntesis, sostuvo que se deniega la solicitud por aplicación de la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 y N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285, en relación al artículo séptimo literal c) de su Reglamento, por cuanto se trata de un requerimiento genérico, cuya atención implica o implicará distraer indebidamente a los funcionarios de la Universidad y NIC Chile del cumplimiento regular de sus labores habituales; 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, desde que la publicidad de la información solicitada, importa la afectación de los derechos de las personas, particularmente de su seguridad, la esfera de su vida privada por el tratamiento no autorizado de datos personales y los derechos de carácter comercial o económico; y 21 N° 5 de la citada Ley porque implica acceder a la entrega de información declarada reservada por la Ley N° 19.628 de protección de la vida privada, que por haber sido dictada con anterioridad a la reforma constitucional introducida por la Ley N° 20.050, cumple con el requisito de ser de quórum calificado.

6.- Por Decisión de Amparo Rol C4635-23, adoptada en sesión ordinaria N° 1392 de su Consejo Directivo de 19 de octubre de 2023, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por el requirente y ordenó a la Universidad de Chile entregar la información consultada.

7.- En contra de dicha decisión, la reclamada Universidad de Chile interpuso reclamo de ilegalidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 20.285.

Cuarto: Que el Consejo para la Transparencia como fundamentos para acoger el amparo por denegación de acceso a la información, sostuvo lo siguiente:

1) Que, sobre el particular y ante similares alegaciones esta Corporación ya se ha pronunciado en las decisiones de amparo C4730-18, C2413-20, C7120-20, entre otras, desestimando idénticas alegaciones y causales de reserva;

2) Que en virtud de lo señalado y habiéndose establecido por esta Corporación la publicidad de la información pedida en oportunidades anteriores y entendiendo que lo pedido en nada afecta derechos de terceros por cuanto versa



sobre información que debe obrar en poder de la reclamada por ser el organismo requerido el que está a cargo del registro de dominios, se acogerá el presenta amparo, desestimándose las causales de reserva invocadas para denegar la divulgación de información que obra en poder de la requerida;

3) Que en tal sentido, cabe señalar además que lo pedido no versa sobre datos personales, razón por la cual no se configura la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 5 en relación a lo previsto en la normativa sobre protección de la vida privada;

4) Que por último, y atendido lo ya expuesto precedentemente, se desestimarán las peticiones formuladas por la Universidad en este procedimiento.

Como se advierte de la resolución cuestionada, el reclamo atañe a una materia que ha sido objeto de diversos pronunciamientos previos por parte del Consejo para la Transparencia y a cuyo respecto de manera uniforme se han desestimado las alegaciones y causales de reserva invocadas por la reclamante, por estimar que se trata de información pública, que su publicidad en nada afecta los derechos de terceros, por cuanto se trata de información que la institución requerida tiene en su poder desde que está a cargo del registro de dominios y porque no se trata de datos personales.

Quinto: Que lo primero que cabe consignar es que el reclamo de ilegalidad regulado en el artículo 28 de la Ley de Transparencia es un recurso de derecho estricto que tiene únicamente como objeto examinar la legalidad de la decisión del Consejo para la Transparencia, de acuerdo al mérito del procedimiento incoado en sede administrativa, lo que implica que esta Corte sólo está facultada para determinar si lo resuelto se ajusta a la ley vigente en la materia.

Sexto: Que en sustento de su libelo, la reclamante aduce que la ilegalidad puede fundarse en tres clases de infracciones: en primer lugar, puede tratarse de una infracción a las normas sobre secreto establecidas como causales de denegación de información en el artículo 21 de la Ley; en segundo lugar, puede tratarse de una infracción a otras normas de la ley referida, tales como, las que establecen el procedimiento bajo el cual tiene lugar la decisión del Consejo, o las que fijan el ámbito de competencia de éste; y, por último, puede tratarse de la infracción de normas legales previstas en cuerpos normativos distintos de la Ley N°20.285.

Al efecto, especifica que invoca contravenciones de legalidad a los 3°, 4°, 5°, 10°, 11° letras a), b), c) y d), 20°, 21° numerales 1, 2 y 5, 25°, 28° y 33° letras b), j)



y m), de la Ley N°20.285; en los artículos 2° letras f), l), ñ) y o), 4°, 7°, 9° y 12° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, Ley N°19.628; y, en los artículos 8° y 19 N°4 de la Constitución Política de la República, estructurando su libelo sobre los siguientes puntos:

1. La decisión reclamada ordena la entrega de información que no es pública.
2. La decisión reclamada ordena la entrega de datos personales y de información que afecta la seguridad y los derechos de terceros.
3. La decisión reclamada omite emplazar a los terceros que se verán afectados con la entrega de la información requerida.
4. La decisión reclamada afecta el funcionamiento de NIC CHILE.

Séptimo: Que los diversos cuestionamientos que hace la Universidad acerca de la inconveniencia de cumplir con lo solicitado por el requirente no pueden ser acogidos por esta Corte sino en cuanto se adecuan a alguna de las causales del artículo 21 o del inciso tercero del artículo 28, ambas normas de la Ley de Transparencia, pues el señalado artículo 21 expresa que “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:...”

En razón de lo anterior, el reclamante invoca causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 1, 2 y 5 de la Ley N° 20.285, esto es, N° 1, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente la letra c) que señala: tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales; N° 2, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico; y N° 5 cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

Octavo: Que, en primer lugar, en cuanto a los aspectos formales del reclamo, cabe tener presente que no se ha discutido que la Universidad de Chile y, por ende, NIC Chile, forman parte de la Administración del Estado, por lo que a



su respecto, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 28 la Ley N°20.285, que impide a los órganos de la Administración del Estado reclamar ante la Corte de Apelaciones, de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21 de la citada ley, como sucede en la especie, no obstante que también se invocaron las causales previstas en los numerales 2 y 5 del mismo texto legal, por lo que no cabe sino concluir, como sostiene el Consejo para la Transparencia, que la reclamante carece de legitimación activa respecto de las objeciones que dicen relación con la causal del N° 1 del artículo 21, esto es, aquella que dice relación con la afectación de la decisión de amparo en relación al funcionamiento de NIC Chile, a la que hace referencia en el punto 4 del reclamo interpuesto, por lo que a su respecto no puede ser admitido, por lo que será rechazado sin emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo.

Noveno: Que, ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, en relación al punto 1 del reclamo que dice relación con el carácter público de la información cuya entrega se ordena y la infracción de los artículos artículo 8° de la Constitución Política de la República, 1, 3, 4, 5 y 10 de la Ley N° 20.285 y 3 y 18 de La Ley N° 19.980, que la reclamante acusa en el libelo, se debe tener presente que la decisión reclamada ordena la entrega de información acerca de los dominios inscritos en NIC Chile, que incluya nombre del dominio, fecha de creación y fecha de expiración de cada dominio, en un formato digital, datos que según ha resuelto invariablemente la Corte Suprema, son públicos por su propia naturaleza y a los que se accede a través de los mecanismos dispuestos por la propia Universidad, sin limitación (CS Rol N° 12.793-2019, CS Rol N° 157-340-2022, CS Rol N° 924-2023, entre otros). Al efecto, siguiendo lo resuelto por el Máximo Tribunal en autos Rol 12.793-2019, cabe precisar que *“una extensión o dominio de internet es un nombre único que identifica a un sitio web, siendo su propósito principal traducir las direcciones IP de cada activo en la red a términos memorizables y fáciles de encontrar. En este sentido, cualquier usuario puede saber que ‘extensión .cl’ se encuentra o no registrada ante NIC Chile, mediante el simple ejercicio de ingresar su dirección en el motor de búsqueda dispuesto por la propia institución o en cualquiera de los tantos otros mecanismos dispuestos en la web”,* a lo que agrega que *“cada dominio registrado (hecho que no es secreto o reservado, como quedo asentado) permite que cualquier persona acceda a la información básica del titular*



del registro” precisamente “a través de las herramientas que provee el propio centro NIC Chile, entre otros, entidad que necesariamente ha sido quien ha nutrido al protocolo “WHOIS” de la información”.

De esta manera, en la especie, resulta claro que la información pedida es pública, desde que si bien no puede homologarse a resoluciones, actas, expedientes, contratos, forma parte de un registro de datos que administra y custodia el ente universitario estatal, al que cualquier usuario puede acceder, por lo que al requerirse su entrega, la reclamante tiene el deber de proporcionarla en los términos solicitados, a menos que se configure una causal de reserva de la información, lo que no sucede en la especie, motivo por el cual no cabe sino desestimar la acusada infracción de ley .

Décimo: Que el punto 2 del reclamo se funda en que la decisión reclamada ordena la entrega de datos personales y de información que afecta su seguridad y los derechos de terceros, infringiendo el artículo 21° N° 2 de la Ley N° 20.285 en relación con los artículos 2°, letras f), l), ñ), o), 4°, 7°, 9°, 12° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y la garantía constitucional establecida en el numeral 4 del artículo 19° de la Constitución Política de la República.

Al efecto, se debe tener en consideración que el Consejo para la Transparencia dispuso la entrega al requirente de información relativa a los dominios inscritos en NIC Chile, incluyendo el nombre del dominio, fecha de creación y fecha de expiración, por lo que no es efectivo que ordene la entrega de datos personales, ya que lo pedido no se refiere a personas naturales ni a antecedentes de las mismas o derechos de carácter comercial o económico de los titulares de dominios, desde que se trata esencialmente de la misma información que se entrega a través del propio sitio web nic.cl o se puede consultar por el servicio WHOIS, por el cual se entregan al usuario los datos relativos al dominio .cl que es objeto de la consulta por el usuario y que coinciden con el requerimiento de información materia de este litigio. En este mismo sentido, cabe tener presente que si bien la información proporcionada puede permitir acceder a datos básicos del titular del dominio ello obedece a que la propia reclamada la incorpora en sus registros y permite su consulta a través del sitio web y el portal WHOIS que facilita su búsqueda, como se ha señalado reiteradamente por la jurisprudencia citada precedentemente, todo lo cual es de pleno conocimiento de los titulares de dominio que adquieren los dominios y conforman los registros, resultando indiferente que se



acceda a dichos datos de modo global, a través de la información requerida o de manera dirigida al operar el usuario directamente el sistema.

Por otra parte, la Universidad no ha precisado ni menos demostrado cómo se afectarían los derechos de carácter comercial o económicos de terceros y en especial los de los titulares de los dominios contenidos en el registro cuya entrega se dispone, siendo insuficientes los argumentos generales vertidos sobre ese aspecto y que dicen relación con el uso indebido de la información que plantea el reclamante para efectos de correos engañosos o abusivos o ataques cibernéticos de distinta índole.

De lo anterior se sigue que los eventuales datos personales o información que afecte la seguridad y derechos de terceros, en ningún caso se podría contener en aquellos datos cuya entrega se ordenó entregar a la reclamante, puesto que ésta se encuentra acotada a los dominios .cl, independientemente de que aquellos datos puedan encontrarse en otra fuente diversa, como el protocolo “WHOIS” alimentado por la propia reclamante.

Por todo lo expuesto, también se desestima el reclamo de ilegalidad por la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285.

Por los mismos fundamentos se rechaza la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, que se invoca a efectos de argumentar que la información solicitada está protegida por una ley específica de quórum calificado, la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada, que regula el tratamiento de datos personales y que por tanto los datos personales contenidos en los registros de dominios ".CL" están sujetos a reserva, ya que como se dijo, la información que se ordena entregar no se refiere a datos personales.

Undécimo: Que, finalmente, en cuanto al punto 3 del reclamo relativa a que la decisión reclamada omite emplazar a los terceros que se verán afectados con la entrega de la información requerida, infringiendo los artículos 20, 25 y 28 inciso tercero de la Ley N°20.285 que, en síntesis, regulan la manera de notificar el requerimiento de información que puedan afectar derechos de terceros, facultándolos para oponerse o presentar sus descargos, en su oportunidad, sólo cabe precisar que si bien no se dio cumplimiento a dicha exigencia procesal, su infracción no resulta suficiente para tornar ilegal la decisión de amparo, toda vez que, la información que se ordenó entregar no contempla datos privados que pudieran afectar a terceros.



De esta manera, resulta intrascendente que se hubiesen realizado o no en la tramitación del procedimiento previo, aquellas notificaciones a terceros que, finalmente, no resultaron afectados, con el contenido de la información que se dispuso entregar al requirente, por lo que también se rechazará la ilegalidad invocada a su respecto.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.285, se resuelve:

I.- Se declara inadmisibile el recurso por la causal prevista en el artículo 21 N°1 de la Ley N° 20.285.

II.- Se rechaza, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido en estos antecedentes en contra de la Decisión de Amparo rol C4635-23 del Consejo para la Transparencia, adoptada en sesión ordinaria N° 1392 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de octubre de 2023.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministra interina Sra. Rodríguez.

Rol N° 699-2023. Contencioso Administrativo.

No firma la Ministra señora Durán por estar haciendo uso de permiso administrativo, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Itma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTHQXURUULP

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Suplente Paula Rodríguez F. y Abogado Integrante Cristian Parada B. Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTHQXURUULP